

El parto de la democracia brasileña *

WILLIAM C. SMITH

INTRODUCCIÓN

El 15 de marzo de 1987 Brasil celebró el segundo aniversario de la *Nova República*, expresión con que se conoce popularmente al nuevo gobierno civil encabezado por José Sarney.¹ Si bien es cierto que conmemorar el retorno a una política más abierta y competitiva a la que precedieron veintiún años de regímenes autoritarios justifica ciertamente el surgimiento de un orgullo cívico nacional, el empeoramiento de la crisis económica y el aumento de los conflictos sociales, políticos e institucionales provoca evidentemente una profunda inquietud en muchos brasileños acerca del futuro de la incipiente democracia en su país.

De acuerdo con los patrones convencionales, Brasil se ubica actualmente en las filas de las democracias políticas consumadas. Sin embargo, desde un punto de vista más exigente que atendiera al contenido y calidad de las instituciones políticas en juego, en realidad la transición brasileña a partir del autoritarismo ha entrado tan sólo en una fase nueva y, hasta cierto punto, más compleja y problemática, en la cual la democratización genuina apenas empieza a manifestarse. El nuevo régimen democrático enfrenta hoy el reto de ir más allá de su autocomplacencia por los cambios políticos e institucionales, para atender a los problemas fundamentales de justicia social y crecimiento económico más equilibrado, mismos que se descuidaron durante las dos décadas de gobiernos autoritarios. De este modo, la *Nova República* se halla, en su segundo aniversario, en una coyuntura crucial de su breve historia. La encrucijada que

* Versión revisada y actualizada de la ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), en Boston, del 13 al 25 de septiembre de 1986. Edgar Pontes de Magalhães, Scott Mainwaring, Barbara Geddes, Enrique Baloyra, Lisa Fuentes y Evan Koster hicieron útiles críticas a las versiones anteriores.

¹ El presidente electo Tancredo Neves se puso gravemente enfermo la víspera de su toma de posesión el 15 de marzo, y José Sarney, su compañero de campaña para la vicepresidencia, tomó el juramento de rigor del ministerio. Neves se sometió a siete operaciones abdominales sin éxito alguno antes de morir el 21 de abril de 1985. Sobre los acontecimientos que rodearon la enfermedad y muerte de Neves, véase Britto (1985).

encara va más allá de la simple elección de las tácticas a seguir, para orientarse hacia decisiones de mayor alcance que habrán de afectar el carácter del Estado y el régimen político, así como también el potencial para una consolidación duradera de sus aún frágiles instituciones democráticas.

Mientras que las fuerzas políticas moderadas y conservadoras, el grueso de la comunidad empresarial y las fuerzas armadas se han aglutinado para brindar su apoyo a Sarney, muchos otros sectores liberales y progresistas de la sociedad brasileña, que encebezaron la oposición democrática al régimen militar, han expresado una frustración considerable hacia la visión conservadora del gobierno de Sarney en lo tocante a la participación política popular, su confianza en las prácticas clientelistas de corte antiguo y a su letargo para hacer frente a las enormes disparidades sociales y económicas en la sociedad brasileña. Tal es el caso, por ejemplo, de Raymundo Faoro, el combativo ex presidente de la Barra de abogados y uno de los intelectuales más destacados y activos en el proceso de democratización, quien ha criticado repetidamente el monopolio político ejercido por los conservadores dentro del partido dominante en el Brasil, el *Partido do Movimento Democrático Brasileiro* (Partido del Movimiento Democrático Brasileño o PMDB). Faoro incluso ha comparado el gobierno actual con el régimen dictatorial de Getulio Vargas de finales de la década de los treinta y principios de los cuarenta; según su analogía, la *Nova República* queda mejor conceptualizada como el "*Estado Novo* del PMDB" (Senhor, 1985c; Fernandes, 1985).

Esta y otras críticas similares plantean varias cuestiones interesantes que atañen a la futura dirección de la *Nova República* y las probabilidades de una consolidación democrática. ¿Prevalecerá al final la continuidad o la ruptura con el legado autoritario de los militares? ¿Cuáles son los derroteros probables que podría tomar alternativamente la *Nova República*?

En términos generales se abren ante el régimen civil actual dos proyectos opuestos. El primero, *conciliação pelo alto* o "*conciliación de las élites desde arriba*", sería "liberal", pero su habilidad para aventurarse a realizar aquellas transformaciones sociales y económicas que se necesitan urgentemente estaría restringida en un sentido fundamental. El segundo proyecto, "la democratización fundamental", tiene como premisa una extensión mucho más ampliada de la ciudadanía hacia las clases subalternas, a la vez que la modernización de la estructura social y de la economía política.

Este ensayo se consagra al examen de estas posibilidades mediante la discusión de los conflictos básicos relacionados con la naturaleza del nuevo régimen democrático, así como también mediante el análisis de la relación entre el Estado y los sectores subordinados de la sociedad brasileña. Habremos de conceder una atención particular al innovador tratamiento

heterodoxo de choque de la economía, el Plan Cruzado, los cambios en los alineamientos en los partidos políticos, y el ambiguo papel del ejército en el proceso de consolidación democrática. En la sección final examinaré las probabilidades de los dos derroteros políticos a seguir —conciliación de las élites desde arriba o mayor desarrollo de la democratización— y ofreceré algunas especulaciones tentativas tocantes a las fuerzas que, creo, habrán de configurar la futura transformación política del Brasil. La comprensión de estos complejos temas no sería posible sin una noción de las fuerzas históricas más amplias que se entretujan con los acontecimientos contemporáneos. Las masivas desigualdades sociales y económicas, y el legado de liberalización y cambio de régimen a través de una “transición desde arriba” controlada por las élites son en particular elementos de importancia decisiva en el parto de la democracia brasileña en la *Nova República*.

DEMOCRACIA, EQUIDAD Y DESARROLLO “SALVAJE”

La consolidación de la frágil democracia en el Brasil está inextricablemente entrelazada con la modernización y transformación de un patrón de desarrollo particularmente perverso en el país, patrón al que se ha dado en llamar con frecuencia “capitalismo salvaje”. Aunque esta nación se ufana de ocupar el octavo lugar entre los países de mayor economía de mercado en el mundo, al tiempo que es el principal poder emergente de los países en desarrollo más avanzados, muy a menudo se le considera, incluso por sus propias élites políticas, clases dominantes y poderosos actores transnacionales, como una verdadera “tierra de nadie a la espera de ser conquistada y transformada en un negocio lucrativo”. En efecto, en el curso de las últimas cinco décadas, el capitalismo brasileño se ha extendido de un modo ciego sin que haya desarrollado simultáneamente ni las instituciones ni una sociedad civil fuerte, bien articulada y con la autoconciencia necesaria para atenuar las tensiones sociopolíticas generadas por una distribución extremadamente desigual del ingreso, la riqueza y las oportunidades de vida (Castro Andrade, 1981).

Las nefastas consecuencias de orden social de este modelo brasileño de desarrollo quedan evidenciadas en las acerbadas polaridades entre la pobreza de las masas y la concentración de enormes riquezas. La gran mayoría de las clases urbanas y rurales populares no se ha beneficiado sustancialmente de la triplicación del ingreso *per capita* desde la década de los cincuenta. Llega a las dos terceras partes la cantidad de brasileños que no logra alcanzar un nivel mínimo, decente, de vida; un sistema funestamente inadecuado e inequitativo de educación limita severamente las posibilidades de movilidad social por medio del éxito individual en el mercado. La desnutrición y una vivienda inadecuada constituyen problemas masivos de salud pública, no solamente en el decaído nordeste,

sino también por todo el país. Aun el estado de São Paulo, que tiene un ingreso *per capita* de más de 4 000 dólares (el doble del promedio nacional) y es fuente de más del 40 por ciento del producto interno bruto del Brasil así como del 60 por ciento del valor industrial total, da muestras de dichas patologías sociales de la manera más aguda.

Una idea burda de las masivas desigualdades socioeconómicas asociadas con este tipo de acumulación capitalista de reclutamiento forzado, bajo los auspicios autoritarios, puede percibirse en los patrones prevalentes de la distribución del ingreso. La concentración de éste alcanzó un punto de máxima desigualdad de 1967 a 1973 durante el llamado "milagro económico" con una tasa de crecimiento del 10 al 11 por ciento anual. La equidad mejoró tan sólo en forma marginal durante los años restantes de la década de los setenta. En 1980, el 50 por ciento más pobre recibió el 12.6 por ciento del ingreso total, a diferencia de 1960, cuando recibió el 17.4 por ciento; en contraste con ello, los más ricos, quienes constituyen un 10 por ciento, incrementaron espectacularmente su participación en el ingreso nacional, pues de 39.6 por ciento pasaron a 50.9 en el mismo lapso. La crisis por la deuda y el crecimiento negativo en el ingreso *per capita* en los primeros años de la década de los ochenta exacerbaron estas desigualdades estructurales, ya de por sí profundamente incrustadas. El creciente conflicto distribucional corroyó no sólo la ya precaria situación de los pobres urbanos y rurales sino que también minó el estatus recientemente adquirido por grandes sectores de la hasta entonces privilegiada clase media (Singer, 1985; Abranches, 1985).

Las propuestas de una comisión especial designada por el presidente Sarney para estudiar estas hondas disparidades de clase, sector y región, y para formular algunas opciones para el futuro desarrollo del país, indican que por lo menos algunos grupos de la élite pueden estar preparados para encarar un reto semejante. En su reporte *Brasil 2000*, la comisión se pronunció por la necesidad de reformas fundamentales de la economía política del Brasil, misma a la que caracterizó como un "sistema de producción adverso a la incorporación de las masas", a la vez que advirtió sobre la posibilidad de que habría brotes de inquietud social e inestabilidad política si no se llevaban a cabo cambios mayores en un futuro próximo (Jaguaribe, *et al.*, 1986). El diagnóstico es prometedor, pero queda por ver si las élites económicas y políticas dominantes pueden hacer acopio del suficiente ánimo y sabiduría para llevar a cabo los cambios necesarios, y radicales, en el "capitalismo salvaje" del Brasil.

DE LA LIBERALIZACIÓN AUTORITARIA A LA DEMOCRATIZACIÓN

Para comprender la política actual de la *Nova República* es de importancia crucial echar una ojeada a las peculiaridades de la transición a partir del autoritarismo. La breve discusión que presentamos más ade-

lante pone especial interés en la complejidad de la relación dialéctica entre la sociedad civil y el Estado, y entre las iniciativas de la élite y la resistencia de la oposición.

De acuerdo con este punto de vista, el proyecto de la liberalización autoritaria, conocida al principio como *distensão* (distensión), y luego como *abertura* (apertura), constituyó la cristalización de una acción recíproca, compleja y contradictoria, entre las iniciativas dirigidas a mantener la posición sustentada por las élites y la resistencia al régimen autoritario por un número diverso de grupos en la sociedad civil (Moreira Alves, 1984; Diniz, 1985; Smith, 1987). La interacción entre las iniciativas estatales y la resistencia civil de la sociedad a las mismas, y viceversa, es la clave de la marcha de los acontecimientos políticos durante los dos últimos gobiernos encabezados por los militares. El presidente Ernesto Geisel (1974-1979) concibió la *distensão* primariamente como un relajamiento gradual de los militares de la responsabilidad directa con respecto al poder ejecutivo. Esta desarticulación habría de efectuarse por medio de una cautelosa liberalización (mitigación de la censura de prensa, el recurso menos frecuente a la represión, una competencia electoral limitada, etc.) la cual se verificaría a través de la promoción de una alianza entre los políticos conservadores, los tecnócratas civiles y las élites empresariales y financieras.

La alternancia de avances y retrocesos puestos en marcha por Geisel en 1974 respondieron inicialmente, y en un sentido primario, a una lógica del poder estatal. Este proceso adquirió gradualmente una dinámica propia que dio lugar a una lógica social de expansión y autonomización democráticas cada vez más fuerte, con respecto al poder estatal, la cual hizo que los acontecimientos rebasaran "el proyecto de apertura" original de los militares en la dirección de un "proceso de apertura" distinto cualitativamente (Diniz, 1985; Smith, 1987). Esta última fase se vio marcada por el surgimiento de nuevas fuerzas colectivas (en particular el "nuevo sindicalismo" y ciertos movimientos laicos y religiosos de origen popular) así como por la revitalización de otras fuerzas de la oposición que ya existían (Moreira Alves, 1984; Mainwaring y Viola, 1984; Tavares de Almeida, 1983), y que contribuyeron a la progresiva erosión del poder estatal con respecto a la sociedad civil, al igual que a la pérdida de control por parte del régimen sobre el programa e itinerario de la transición.

Durante el mandato de Geisel, la iniciativa política estratégica provenía del régimen, aunque respondía a las presiones de la sociedad en momentos críticos. En contraste con ello, durante la administración del presidente João Figueiredo (1979-1985), la habilidad del régimen para dictar el ritmo de los acontecimientos se vio socavada en forma avasalladora por el deterioro del apoyo popular y de las élites, y por una oposición crecientemente confiada y agresiva. En 1983 y 1984 dicha erosión se manifestó en la progresiva pérdida de autonomía por parte del Estado

y en una rápida declinación de su capacidad para controlar el proceso de transición, así como también en el empeoramiento de la situación económica y en la intensificación creciente del abatimiento y el malestar (Mainwaring, 1986; Lamounier, Moura, 1986; Smith, 1987).

La interacción entre semejante dinámica específicamente política y el desmedro de la economía aceleraron aún más la activación de la sociedad civil. La emergencia de fuerzas opositoras con apego entre las masas pronto excedió las esperanzas de la oposición y los miedos del régimen, conforme la "lenta, gradual y segura" liberalización insensiblemente se transformaba en una exigencia por la democratización a secas. Tal movilización fracasó en el logro de su objetivo inmediato, pero su fuerza se hizo notablemente evidente en la campaña *Diretas Já!* de la oposición en 1964, misma que favorecía un retorno a las elecciones presidenciales directas.

De esta manera, el proceso de cambio del régimen en Brasil ha estado marcado por una tensión permanente entre la continuidad y el cambio. Dicha tensión fue la razón fundamental del extremo gradualismo de la transición, su carácter prácticamente experimental, la naturaleza extremadamente difusa de su agenda, y, consecuentemente, de la permanente incertidumbre en cuanto a la continuidad misma de la liberalización en cuanto tal. Estos rasgos han llevado a los analistas de transiciones políticas comparadas a clasificar la experiencia brasileña como una "transición desde arriba" en la que las élites autoritarias intentan manipular su salida del poder. En un inicio, la movilización popular y la oposición democrática enraizada en la sociedad civil se manifestaron como factores secundarios. Sin embargo, como sugiere lo antedicho, una vez que la transición se ha echado a andar, emerge un proceso implícito de negociación, regateo y compromisos entre las élites autoritarias y sus opositores (Viola y Mainwaring, 1985; Share y Mainwaring, 1986).

Por consiguiente, la politización de la sociedad en el Brasil, aunque mucho menos extensa que en Argentina y Uruguay durante sus transiciones, sí contribuyó en última instancia a una erosión significativa de la legitimidad política del régimen militar en tanto cuanto el sentimiento de oposición empezó a articularse en demandas específicas por parte de profesionistas de la clase media, la Iglesia católica, los empresarios, la clase obrera urbana y una variedad de movimientos sociales de origen popular. No obstante, tal oposición debe considerarse en forma tangencial en la medida en que sólo los grupos más radicales (los sindicatos más combativos, algunos movimientos sociales nuevos y la izquierda militante) plantearon demandas de transformación radical del Estado, la estructura social y la economía política. Esta potencial "crisis de hegemonía" nunca hizo erupción (con lo que se atenuó la crisis del régimen), puesto que las élites moderadas afirmaron exitosamente su liderazgo sobre la oposición democrática, y marginaron a los dirigentes y fuerzas sociales más radicales. Tras la derrota de la campaña *Diretas Já!*, la sucesión presidencial tuvo lugar

dentro de los estrechos confines de las elecciones indirectas. Aun así, se había efectuado un cambio en las efervescentes aguas del escenario político: Paulo Maluf, el candidato del *Partido Democrático Social*, o PDS, favorable al régimen, fue derrotado en forma decisiva en el colegio electoral por el candidato de oposición, Tancredo Neves, ex gobernador de Minas Gerais. Neves y su compañero por la vicepresidencia, el ex senador del PDS José Sarney, fueron apoyados por la *Aliança Democrática*, en la que se hallaban incluidos el PMDB y el *Partido da Frente Liberal* (Partido del Frente Liberal o PDL), que estaba constituido por una facción disidente que se separó del PDS a mediados de 1984 (Chagas, 1985; Dimenstein, *et al.*, 1985).

La toma de posesión de un presidente civil y la instauración de la democracia formal llevó al proceso de transición hacia su conclusión en sentido estricto; sin embargo, en buena medida la democratización comenzó en realidad en ese momento con la extensión de la agenda política de la transición que por primera vez incluía un avance crucial y cualitativo que iba más allá de la liberalización hacia una ruptura potencial de prácticas autoritarias. La democratización genuina —la tarea del régimen postautoritario— abarca el establecimiento y consolidación de nuevas medidas institucionales que hagan posible llevar a cabo libertades de asociación que tengan sentido para todos los grupos: sufragio adulto universal en votaciones secretas; elecciones regulares competitivas con alternancia en el poder, y responsabilidad del ejecutivo. Por lo mismo, la democratización genuina generará casi con toda seguridad presiones adicionales que desborden el ámbito político-institucional para hacerse cargo de la dimensión social y económica de la democracia, es decir, para extender la “lógica de la mayoría” a la sociedad civil y la economía por medio de la ampliación y profundización del acceso y participación populares a las esferas de la cultura, el consumo y la producción.

LA “NUEVA REPÚBLICA” Y EL PROGRAMA DEMOCRÁTICO

El desmantelamiento del autoritarismo

El primer problema, y en muchos sentidos el más crucial, que encaran todos los regímenes postautoritarios es la construcción de nuevas instituciones democráticas. La *remoção do entulho autoritário* (“eliminación de los desechos autoritarios”) como la calificara tan acertadamente Tancredo Neves, comenzó con una rapidez sorprendente. Durante el breve período desde mediados de marzo hasta mediados de mayo de 1985, mismo al que el presidente del PMDB, Ulysses Guimarães, calificó como “ingobernabilidad democrática”, el Congreso eliminó muchos de los aspectos más escandalosos del gobierno autoritario. Entre las reformas votadas por el Congreso se contaron la elección directa para todos los puestos ejecutivos,

incluyendo la presidencia; la legalización de los diversos partidos comunistas; la legalización de las confederaciones nacionales obreras; la extensión del sufragio a los analfabetas, y la abolición o relajación de muchas restricciones a los partidos políticos.²

La eliminación de este tipo de “desechos” fue relativamente sencilla, pero el cumplimiento de las promesas del convenio constitucional resultó considerablemente más problemática. Sarney y virtualmente toda la *Aliança Democrática* rechazaron las exigencias para convocar a elecciones presidenciales directas en 1986, dejando que la duración del mandato de Sarney (fijada en seis años por Geisel) fuera decidida en 1987 por una Asamblea Constituyente encargada de la redacción de una nueva constitución. El problema acerca de cómo habría de seleccionarse tal asamblea resultó altamente polémica. El gobierno frustró las propuestas planteadas por los reformistas del PMDB y la izquierda para una convención constitucional autónoma. Ante la consternación de la Barra de abogados, de connotados eruditos en asuntos constitucionales y políticos progresistas, Sarney nombró una comisión de estudio previa a la convención de “notables”, encabezada por el octogenario jurista conservador Alfonso Ariños de Mello Franco. A fines de 1985, el Congreso aprobó una fórmula que favorecía a las fuerzas conservadoras mediante la cual el Congreso a ser elegido en noviembre de 1986 sesionaría simultáneamente en calidad de Asamblea Constituyente, tan largamente esperada.³ Pese a su importancia fundamental, la reforma constitucional quedó virtualmente ignorada tanto por los políticos como por el pueblo durante la campaña electoral de 1986.

Cuando la Asamblea Constituyente inició sus deliberaciones en febrero de 1987, aquellos sectores encabezados por los representantes de los que habían sido elegidos con el apoyo financiero del sector empresarial, los bancos y la agricultura se resolvieron a obstruir las propuestas en favor de una participación popular más amplia y una extensión de los derechos ciudadanos para los pobres, así como de las políticas gubernamentales redistributivas, la reforma agraria y las limitaciones a las empresas transnacionales y los bancos de propiedad extranjera. Los liberales y re-

² La abolición de los “desechos” más escandalosos del autoritarismo no eliminó en modo alguno la embestida profundamente autoritaria del sistema legal brasileño. Véase Dallari (1986) para una breve discusión de las principales limitaciones constitucionales y legales de los derechos individuales y el régimen democrático, aún presentes en la legislación brasileña.

³ El trabajo de la Comisión Arinos se vio marcado por constantes conflictos entre conservadores y reformistas. La comisión editó finalmente un conjunto de recomendaciones muy detalladas, algunas de las cuales eran sorprendentemente nacionalistas y estatistas en su orientación; como era de esperarse, las referencias al papel de las fuerzas armadas fueron pocas y vagas. No satisfecho con el trabajo de los “notables”, Sarney anunció que avalaría el borrador de la comisión. Sobre los debates que rodearon las propuestas para reforma constitucional, véase Seder (1985) y Lessa (1986).

formadores se mostraron particularmente exasperados por aquellas propuestas que transferían la mayor parte de los poderes legislativos del Congreso a Sarney, mientras que los diputados y senadores se dedicaban a debatir la nueva constitución. Raymundo Faoro, por ejemplo, comentó que si se aceptaba una propuesta semejante, “estaríamos ingresando en una dictadura temporal que, como siempre en el Brasil, tendería a volverse permanente”. Hermann Assis Baeta, consejero de la Barra de abogados, declaró que de todas las asambleas constituyentes en la historia brasileña la actual “es la más manipulada y controlada [por la rama ejecutiva] ya que nació de un pacto entre las élites”. Fábio Comparato, profesor de leyes en la Universidad de São Paulo y erudito constitucional de avanzada, señaló que la Asamblea tenía una función puramente “decorativa”, puesto que se limitaba a “sancionar la transición” que ya había negociado la dirección de la *Aliança Democrática* con el régimen autoritario, como condición para la salida del poder por parte de los militares (*Senhor*, 1987c).

Si bien queda aún por verse la confirmación de tales juicios, parece que a pesar del cuestionamiento activo de los reformistas, en general son las fuerzas conservadoras las que probablemente controlen la redacción de la nueva constitución del Brasil.

El Estado y la clase obrera

La clase obrera es generalmente uno de los actores principales que pugnan por una ampliación de la participación popular y por la promulgación de reformas políticas con vastas implicaciones sociales y económicas. Los verdaderos salarios para muchas categorías ocupacionales cayeron dramáticamente de 1980 a 1984. En consecuencia, el gobierno de Sarney ha tenido que hacer frente a una constante presión por parte de los obreros organizados para hacer de la democracia una realidad para la clase trabajadora.

La recuperación económica y una atmósfera más libre han conducido en forma combinada al fortalecimiento del trabajo organizado. La movilización obrera ha aumentado a niveles mayores que aquellos alcanzados durante los últimos años del gobierno autoritario. Más de seis millones de trabajadores se fueron a la huelga en algún momento durante el año de 1985. Las huelgas en São Paulo y otros centros urbanos mayores emprendidas por los trabajadores metalúrgicos, los empleados públicos, doctores, enfermeras, personal de aerolíneas y trabajadores postales se llevaron a cabo en 1985 y, luego, de nuevo en 1986. Todo el sistema financiero del país se vio paralizado brevemente en 1985 por huelgas en las que participaron más de 700 000 empleados bancarios. No obstante, los esfuerzos de los trabajadores bancarios en septiembre de 1986 para repetir esta acción desembocaron en el fracaso. Aun así, cientos de huelgas tuvieron

lugar durante la segunda mitad de 1986, y el año se cerró, el 12 de diciembre, con una huelga general a escala nacional que tuvo un éxito moderado —a pesar de una insuficiente planeación—, contra las políticas económicas oficiales.

El gobierno de Sarney ha reaccionado al reto de la clase obrera de una manera esquizofrénica. Bajo la conducción del ministro del Trabajo, Almir Pazzianotto, abogado laboral que estaba en buenos términos con muchos de los sindicatos más combativos del Brasil, las fuerzas reformistas dentro del PMDB se declararon, en 1985, abiertamente a favor de un “pacto social” entre el trabajo, el capital y el Estado. Pese a las numerosas discusiones con las dos confederaciones laborales mayores, la *Central Única dos Trabalhadores* (Central Única de los Trabajadores o CUT) y la *Confederação Geral dos Trabalhadores* (Confederación General de Trabajadores o CGT), la idea de un “pacto social” progresó muy poco debido a la dificultad del gobierno para presentar propuestas concretas.

Pazzianotto y el ala reformista del PMDB también propusieron reformas mayores a la legislación laboral existente para reconocer la legalidad de las huelgas y para liberar a los sindicatos de los onerosos controles estatales. De marzo a octubre de 1985, Pazzianotto envió no menos de diez proyectos legales de reforma laboral para que los aprobara el Presidente. No obstante, sólo hasta julio de 1986 Pazzianotto logró finalmente presentar el nuevo borrador de una iniciativa mucho más diluida. Esta reforma que proponía estaba muy por debajo de la gran revisión de la legislación laboral existente que prometiera Sarney en 1985; parecía tener la intención de combinar algunas concesiones modestas con el intento de restringir la influencia del *Partido dos Trabalhadores* (Partido de los Trabajadores o PT) así como el poder de los sindicatos más militantes, y a la CUT, la organización nacional que abarca a los sindicatos más agresivos (Morais, 1986).

La redacción de una nueva legislación laboral está ahora en la orden del día de la Asamblea Constituyente donde los sindicatos y los reformistas tendrán que hacer frente a la oposición inexorable de los poderosos intereses empresariales y militares. De hecho, una de las razones primarias del atolladero en que se encuentra el régimen con el trabajo organizado ha sido la resistencia de las fuerzas armadas a la modernización de la legislación corporativista del Brasil. El general Ivan de Souza Mendes, jefe del *Serviço Nacional de Inteligência* o SNI, que es la combinación brasileña de una CIA y un FBI, ha rivalizado activamente con Pazzianotto por el liderazgo para coordinar la respuesta gubernamental ante las movilizaciones laborales, y ha ejercido presión para que se recurra a la ley draconiana antihuelguista con el fin de “garantizar el mantenimiento del orden público y la paz social”. Las presiones han sido en ocasiones tan fuertes que el clima en el interior del SNI se ha comparado con un “ambiente de casi histeria”. La firme defensa de Pazzianotto de una aproxima-

ción conciliatoria ha impedido hasta ahora el recurso a la represión abierta. La preocupación por las consecuencias negativas que podría generar la represión en las urnas electorales fue también decisiva en la moderación gubernamental previa a las elecciones de noviembre de 1986.

Esta situación de relativa paz podría alterarse en 1987. El nuevo año se inició con una tensión en las relaciones entre las dos confederaciones laborales mayores, la CUT y la CGT, y el gobierno, debido al recrudecimiento de la inflación (véase más abajo la sección sobre el Plan Cruzado). Para controlar la peligrosa espiral de precios-salarios y para prevenir un resurgimiento de los conflictos distribucionales que socavarían su gobierno, Sarney asignó al ministro laboral Pazzianotto la tarea de sacar nuevamente a flote las propuestas anteriores para un "pacto social" con los empresarios y los trabajadores. Con todo, es probable que la mejor oportunidad para un pacto social haya pasado ya; como observara a principios de 1985 Ulysses Guimarães, líder del PMDB: "Un pacto puede lograrse sólo durante los primeros 100 días de [un nuevo] gobierno, cuando la confianza es elevada". Hay muchos obstáculos que vencer, y no es el menor el que deriva de las resquebrajaduras en el seno de cada uno de los partidos involucrados —gobierno, empresa y trabajo organizado.⁴

Mientras que Pazzianotto defendía políticas más conciliadoras hacia el sector laboral, los ministerios de Finanzas y Planeación se ocupaban del efecto de los incrementos salariales sobre la inflación, las utilidades y el déficit presupuestal. De manera similar, el trabajo organizado se dividió, mostrándose la más militante CUT abiertamente hostil a las propuestas de restricción salarial y de pacto social, mientras que la CGT se manifestó más conciliadora aunque temerosa de actuar sola por miedo a que las concesiones al sector empresarial y al gobierno le costaran el apoyo de sus sindicatos miembros y sus masas obreras. Conforme aumentaban las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre un pacto social formal, el discurso oficial empezó a hablar de una "tregua" temporal para contener la inflación. Pero, aun cuando se conviniera en establecer dicha tregua, es de dudar que sería respetada por mucho tiempo si los conflictos distribucionales y la polarización social empeoran, como parece ser el caso.

⁴ Para que los pactos sociales funcionen efectivamente deben reunirse varias condiciones, entre las cuales: 1) una convergencia razonable de estrategias perseguidas por el área laboral, de la empresa y el Estado; 2) cada partido debe actuar de una manera unificada; 3) el Estado debe ceder parte de su autoridad decisional a las asociaciones más importantes del trabajo y la empresa, y 4) los dirigentes laborales y empresariales deben ser considerados por sus masas como las legítimas autoridades de mando, y deben ser capaces de vincular a sus miembros para acordar sobre las políticas a seguir. Para una discusión más detallada de los pactos sociales y *concertación*, véase Cavarozzi, De Riz, Feldman (1986), y Smith y Koster (1987).

El Estado, los campesinos y la reforma agraria

En el Brasil se asiste actualmente a una lucha armada. No es una guerra de guerrillas, sino una guerra sostenida por los terratenientes contra los que carecen de tierras. De acuerdo con las cifras oficiales, 567 personas murieron por la violencia rural entre 1980 y 1985, y sólo en 1985 fueron asesinados 155. Las cifras no oficiales estiman que en 1985 hubo más de 370 muertos, con aproximadamente otros 120 muertos en los primeros cinco meses de 1986. La mayor parte han sido campesinos asesinados por *yagunços* (pistoleros) contratados por grandes terratenientes, aunque varios sacerdotes y activistas laicos quedaron también anotados entre las víctimas. Dom Luciano Mendes de Almeida, secretario general de la Conferencia Episcopal Brasileña, ha culpado de los asesinatos al "egoísmo y maldad" de los terratenientes. Entre tanto, la resistencia y violencia en el campo, desalojos de familias incluidos, continúan aumentando; por lo menos unos 42 grupos separados de familias campesinas sin tierra, que comprenden unos 60 000 individuos, estaban viviendo en campamentos con tiendas de campaña improvisadas en 11 estados a principios de 1986 (*Veja*, 1986b).

La concentración de la tenencia de la tierra, la desigualdad tremenda en el ingreso y la violencia rural tienen hondas raíces en la historia brasileña, pero se vieron exacerbadas en la década de los setenta y principios de la de los ochenta por el establecimiento de un moderno complejo agroindustrial, una creciente orientación hacia las cosechas de exportación y la rápida expansión de la frontera agrícola (Sorj, 1981; Da Silva, 1985). Fue por ello que la reforma agraria se convirtió en uno de los símbolos principales del compromiso de la *Nova República* hacia los pobres. No es sorprendente que el aumento de la violencia rural en 1985 y 1986 se haya visto influido por las promesas públicas de Sarney en torno a la reforma agraria. Los campesinos y trabajadores rurales sin tierra, al sentirse alentados y legitimados, han acelerado sus esfuerzos por adquirir tierras y han recurrido ocasionalmente a las invasiones ilegales.

El advenimiento de la democracia ha sido testigo también de un acontecimiento sin precedentes: la gran huelga de 1985 en la zona agrícola más rica de São Paulo donde los trabajadores agrícolas y de temporada, conocidos como *boiás-frias*, abandonaron sus instrumentos de labranza durante las cosechas de naranja, azúcar y café. Protestas rurales similares se suscitaron en São Paulo y otros sitios en 1986.

Como respuesta a las exaltadas expectativas y militancia campesinas, el Ministerio de la Reforma Agraria y el Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INCRA) propusieron un esfuerzo mayor convocando a la distribución de 430 millones de kilómetros cuadrados para 1.4 millones de familias sin tierra. Esta ambiciosa propuesta, que gozó del respaldo por parte de la jerarquía católica y sacerdotes activistas, fue obstaculizada por

una campaña extremadamente agresiva emprendida por los terratenientes *fazendeiros* y sus aliados en el Congreso y la Administración. Un proyecto de ley mucho más débil fue aprobado por el Congreso en octubre de 1985, el cual incitaba al presidente del INCRA a que renunciara como protesta (Abramovay, 1986).

El proyecto de ley del Congreso languideció en el palacio presidencial, Planalto, hasta mayo de 1986 cuando Sarney debilitó el plan aún más. Sobrevino entonces una gran crisis política. Algunas organizaciones campesinas protestaron vehementemente por la “traición” del gobierno. Los *fazendeiros* y las principales organizaciones de terratenientes, en un contraste revelador, expersaron una gran satisfacción. No obstante su victoria, los grandes terratenientes, apoyados por grupos extremistas de la derecha conservadora, como *Tradição, Família e Propriedade* (Tradición, familia y propiedad o TFP) y un nuevo grupo de acción política que sostiene tener 50 000 miembros en total, convocó a la *União Democrática Ruralista* (Sindicatos Rurales Democráticos o UDR) y se entregó al reclutamiento activo y a armar milicias privadas paramilitares (IBASE, 1986a).

Consternada, la jerarquía católica inició una sarcástica confrontación pública con el gobierno de Sarney. Dom Ivo Lorscheider, presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña, denunció públicamente el fracaso del gobierno para promulgar una “reforma agraria digna de tal nombre, una auténtica revisión de la estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país”. Dante de Oliveira, diputado del ala izquierda del PMDB y patrocinador en jefe de la malograda enmienda del *Diretas Já!* en 1984, fue llamado a remplazar a Nelson Ribeiro, quien se vio obligado a renunciar al puesto de ministro de la Reforma Agraria. En respuesta a las críticas de la Iglesia y los campesinos, el nuevo ministro sostuvo que la oposición a los planes de reforma agraria “concebidos dentro del sistema capitalista” para promover la “utilización racional” de la propiedad rural era “anti-patriota”. Aquellos que proponían cambios de mayor envergadura empezaron a cuestionar fuertemente tanto la sinceridad gubernamental como su habilidad para enfrentarse a los intereses de los terratenientes. El fracaso de la tan publicitada visita de Sarney al Vaticano, en julio de 1986, para conseguir la ayuda papal con el fin de poner coto al apoyo de la jerarquía católica a una reforma agraria más rápida y extensiva, hizo poco para calmar las tensiones en el campo, aunque las críticas públicas de funcionarios eclesiásticos se vieron un tanto acalladas (*Senhor*, 1986d).

La reforma agraria abarca tanto programas de colonización (*assentamentos*) como expropiaciones de tierra subutilizada para efectos de una redistribución más equitativa y productiva. Hasta la fecha, las expropiaciones han quedado virtualmente paralizadas. La distribución de la tierra mediante la colonización no ha corrido mejor suerte. En realidad, la resistencia y oposición terratenientes al gobierno ha dado como resultado

que sólo 18 000 familias hayan sido reinstaladas, cifra que contrasta con la meta que se había fijado para 1986, de 150 000 familias; la diferencia salta a la vista si se considera el sexenio de Figueiredo durante el cual hubo 800 000 beneficiarios individuales. Sólo 69 propiedades rurales, correspondientes a 273 000 hectáreas, habían sido expropiadas de hecho hacia fines de 1986 (IBASE, 1986a). Si bien Sarney difícilmente puede permitirse el lujo de abandonar esta cuestión de relevancia popular a nivel político, es poco probable que se emprendan acciones reformadoras de mayor alcance en un futuro próximo.

Entre tanto, en atención al creciente desasosiego en el campo, el SNI, el CIEEX, el servicio de inteligencia del ejército y el resto de las agencias de la *comunidade de informações* del ejército han sido convocados por Sarney para investigar las inclinaciones ideológicas de los dirigentes campesinos y de todo el personal del gobierno involucrado en los problemas de la reforma agraria. No está a la vista el final que tendrá esta guerra no declarada.

El Plan Cruzado: la reconciliación de la democracia y la estabilización económica

El gobierno de Sarney hizo frente a un panorama económico desastroso cuando asumió el poder. Los desafíos se multiplicaban en todos los frentes: la administración de la deuda externa más grande del tercer mundo; una severa crisis fiscal del Estado; inflación de tres dígitos; una desenfrenada especulación financiera; baja de la inversión en las actividades productivas; un desasosiego azuzado por las altas expectativas de los trabajadores y la clase media, y la lista podría continuar (Carneiro, 1986; Modiano, 1986).

La situación que prevalecía en la celebración del segundo aniversario de la *Nova República* dejó en claro que la mayor parte de estos desafíos persiste. A principios de 1987, la aguda caída en el superávit comercial y la baja de reservas internacionales, que desembocó en crecientes dificultades en el servicio de la deuda externa, forzaron a los políticos a anunciar una moratoria en los pagos; la inflación, que se había logrado controlar durante 1986, resurgió con virulencia y registró las tasas mensuales más elevadas en la historia brasileña, y el equipo económico de Sarney está afectado por la discordia interna, y enfrenta críticas severas, no sólo por parte de los descontentos consumidores sino también por el sector empresarial. En resumen, el panorama económico no se diferencia tanto de cuando Sarney asumió el poder.

No obstante, pese a este cuadro sombrío, ha habido algunos cambios significativos en la administración económica durante el período de Sarney, cambios que se han manifestado no sólo en los resultados sino en la estrategia, los planes de acción y los instrumentos empleados para estabili-

zar la economía. Tales cambios significaron en su conjunto un alejamiento significativo de la ortodoxia económica que conformó la política gubernamental durante los años del autoritarismo. Cualquier explicación de los mismos debe comenzar con una cuestión fundamental, una que habitualmente elude respuestas definitivas: dadas las coacciones externas a que se ve sometida la economía brasileña, ¿cómo puede darse el crecimiento económico sin que se generen las presiones inflacionarias? En años recientes, Brasil ha tenido que rendir un superávit en el comercio exterior anual de 12 a 13 mil millones de dólares, a fin de atender los pagos de intereses de su enorme deuda externa que ya llega a los 108 mil millones de dólares aproximadamente. Desde otra perspectiva, esto significa que una cantidad equivalente al 4 o 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o aproximadamente un 30 por ciento del ahorro interno neto fluye ahora hacia ultramar en una transferencia líquida de capital destinada a los acreedores del Brasil. Todas las estrategias económicas alternativas deben evaluarse a la luz de este hecho fundamental.

Las profundas divisiones internas, la falta de una dirección clara y simplemente la mala administración durante los primeros seis meses del nuevo régimen hicieron que Sarney se convirtiera en un símbolo de la indecisión para todos aquellos brasileños que esperaban una acción más efectiva. Hacia mediados de 1985 se perfilaba una recuperación económica, pero la vertiginosa tasa de inflación mensual de más del 10 por ciento mantuvo la amenaza de una recesión renovada. Finalmente, temeroso por la pérdida inminente de apoyo político, y frente a los reclamos de anticipar las elecciones presidenciales, Sarney se apresuró a poner en orden el despacho económico del gobierno. El Presidente nombró al industrial de São Paulo Dilson Funaro para que remplazara a Francisco Dornelles en el puesto clave del ministro de Finanzas, operando de este modo el primer cambio en el gabinete que heredó de Tancredo (Sampaio, Affonso, 1986).

La categoría de Dilson Funaro es impecable. Es uno de los empresarios más destacados del Brasil (uno de los diarios principales lo nombró "hombre de negocios del año" en 1984), y recibió sus credenciales democráticas por su participación en la campaña del *Diretas Já!* Diversos analistas de opinión concordaron en afirmar que su designación como Ministro de Finanzas significaba que "por primera vez en varias décadas un representante de la burguesía industrial —el sector privado— está a cargo de la economía" (Singer, 1986; *Latin American Regional Reports: Brazil*, 1985b).

Funaro, João Sayad, el ministro de Planeación, y un equipo de jóvenes economistas de oposición afiliados al PMDB dieron pasos inmediatamente para reorientar la política económica. Comenzaron por adoptar una postura férrea en las negociaciones con el FMI y la comunidad financiera internacional. "Pagaremos solamente lo que podamos. Si alguno de los

CUADRO 1

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 1981-1986

	1981	1982	1983	1984	1985	1986
I. <i>Producción, inflación, finanzas del sector público</i>	<i>Tasas anuales de crecimiento (%)</i>					
Producto Interno Bruto (PIB)	— 1.6	0.9	— 3.2	4.5	8.3	8.2
Producción industrial	— 5.5	0.6	— 6.8	6.0	9.0	12.1
Índice general de precios (IGP)	95.2	99.7	211.0	223.8	235.1	104.1e
PIB <i>per capita</i>	— 4.0	— 1.5	— 5.6	2.1	5.9	4.4e
Expansión del abasto monetario	87.2	65.0	95.0	203.5	312.1	500.0 + e
Déficit del presupuesto federal (% del PIB)	7.1	6.2	3.0	1.6	3.2	—
II. <i>Salarios y empleos</i>	<i>1980 = 100</i>					
Salario mínimo	99.0	100.0	88.0	83.0	86.0	—
Salarios industriales	102.9	109.8	92.0	106.8	141.1	—
Empleo industrial	92.6	87.7	80.3	80.1	87.5	—

CUADRO 1 (Continuación)
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 1981-1986

	1981	1982	1983	1984	1985	1986
III. <i>Balanza de pagos</i>						
	<i>Miles de millones de dólares</i>					
Balanza de cuenta corriente	— 11.8	— 15.4	— 6.8	0.1	— 0.1	— 1.9
Balanza de mercancías	1.2	0.7	6.5	13.1	12.5	10.5
Exportaciones	23.3	19.0	21.9	27.1	25.6	23.3
Importaciones	22.1	18.3	15.4	13.9	13.2	12.8
Servicios netos	— 13.2	— 16.1	— 13.4	— 13.2	— 13.3	— 12.5
Cuenta de capital (neto)	12.8	10.8	5.5	5.0	1.0	— 0.9
Deuda externa pagada	71.9	83.2	91.6	99.8	99.7	—
Proporción por servicio de la deuda	40.2	60.5	43.4	39.5	41.9	39.9
(Interés/Exportaciones en %)						

FUENTE: 1981-1985, los datos en los rubros I y II son de *Conjuntura Económica* y el *Boletín* del Banco Central (varios números); las estimaciones preliminares para 1986, del *Latin American Economic Report*, 31 de diciembre de 1987. Los datos para 1981-1985 en el rubro III, del *Economic and Social Progress in Latin America: 1986 Report* (Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1986); los datos de 1986 son de CACEX.

acreedores no está de acuerdo, puede mandar el cheque de vuelta”, anunció Funaro en junio de 1986. Brasil rechazó la amonestación de ese organismo con respecto a su política económica y comenzó la negociación directa con sus bancos acreedores (*Miami Herald*, 1986).

Aparte de los apremios del exterior en relación con el crecimiento, la estrategia del equipo de Funaro para la expansión económica sostenida arrastrar las hondas desproporciones en ingreso y riqueza desde fines de la década de los setenta. Los sueldos y salarios declinaron precipitadamente, cayendo del 51.8 por ciento del ingreso nacional en 1981 a 46.7 por ciento en 1984. Este gran cambio en favor del capital fue distribuido de forma muy desigual: en 1978 la participación en la cuota de capital del flujo incautado del ingreso nacional al sector bancario bajo forma de ingreso al interés fue del 36.4 por ciento, pero el auge de la especulación financiera durante los años de Figueiredo levantó dramáticamente esta cifra hasta el 59.3 por ciento en 1980 y al 80.8 en 1984. En forma concomitante, la inversión fija de capital, que había sido aproximadamente del 26 por ciento del PIB en los setenta, declinó a un exiguo 16 por ciento del PIB hacia 1984-1985. Para hacer frente a esta situación, el Congreso aprobó a regañadientes el plan de Funaro para una revisión del sistema impositivo con el objeto de reducir el déficit fiscal, asegurar mayor equidad y reorientar el ahorro hacia la inversión productiva (*Senhor*, 1986e).

El crecimiento en 1985 fue de un dinámico 8.3 por ciento, particularmente en São Paulo, que es responsable del 40 por ciento del PIB total: la industria paulista creció en un 11 por ciento, la reserva global de salarios se elevó en un 25 por ciento en términos reales, y el empleo en el ramo manufacturero se incrementó en un 6 por ciento. Pese a estos logros, la economía se hallaba en un momento sumamente delicado, ya que la inflación se acercaba a la marca del 230 por ciento. La inflación se disparó un 16.2 por ciento en enero de 1986, y los pronósticos indicaban que la tasa anual podría alcanzar el 400 por ciento o más. Véase el cuadro 1 para los datos macroeconómicos relevantes.

La alarmante perspectiva de una hiperinflación al estilo argentino galvanizó a los consejeros de Funaro para la furiosa conclusión de un plan secreto antinflacionario. En un dramático discurso televisivo, el 28 de febrero de 1986, el presidente Sarney anunció la nueva reforma monetaria y el plan de estabilización económica, conocida como el Plan de Inflación Cero o Plan Cruzado. Sarney presentó el plan en términos populistas, como “un programa para defender el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados”. Haciendo hincapié en los congelamientos de precios, Sarney dijo a los brasileños que los “convocaba su presidente para que desde cada rincón del Brasil surgieran inspectores de precios” (*Senhor*, 1986b).

El Plan Cruzado (después de la nueva unidad monetaria del mismo nombre que reemplazó al cruzeiro), al igual que el Plan Austral puesto en

práctica con anterioridad en Argentina, tenía como premisa un ataque radical a la “inflación inercial” mediante una rápida desindexación de la economía —el llamado “tratamiento de choque heterodoxo”. Los instrumentos clave fueron los congelamientos simultáneos de precios y salarios (que primero se incrementaron en un 8 por ciento), la imposición de una estricta restricción fiscal y monetaria, y el abandono de las mini-devaluaciones diarias en favor de una tasa de cambio fija, aunque flexible. En contraste con el Plan Austral, puesto en práctica después de años de una severa contracción económica, el Plan Cruzado se estrenó en medio de una vigorosa expansión cíclica posterior a la recesión de principios de la década de los ochenta.⁵

El efecto inmediato del Plan Cruzado fue poco menos que milagroso: la inflación se abatió estrepitosamente a una tasa mensual de aproximadamente menos del 1 por ciento; la inflación para el período marzo-octubre fue menor del 10 por ciento. Estos resultados parecían validar la promesa de Funaro de “un crecimiento japonés con una inflación al estilo suizo”. Pero en el horizonte había nubes perturbadoras, en las que se incluían la proliferación de mercados negros, largas colas, engaños ilegales en los precios (*ágio*) y escasez de leche, carne y otros productos de consumo básico. Asimismo, los planes oficiales para una reforma administrativa de fondo tuvieron múltiples tropiezos, y muchos ministerios gubernamentales y empresas del Estado se resistieron enérgicamente a la nueva dieta de austeridad presupuestaria. Casi sin excepción alguna, los miembros del sector empresarial se quejaron de que los congelamientos de precios habían reducido sus márgenes de ganancias, y muchas compañías estaban reticentes para incrementar la inversión y hacer frente al alza en la demanda del consumidor, aun cuando la economía estaba operando peligrosamente cerca de la utilización total de la capacidad instalada.

Desde una visión retrospectiva, es evidente que la respuesta del equipo de Funaro a estos desafíos del Plan Cruzado fue un caso clásico de “demasiado poco y demasiado tarde”. Las primeras y relativamente menores modificaciones —bautizadas como el *cruzadinho*— fueron anunciadas a fines de julio de 1986; en ellas se contemplaba un fondo de desarrollo nacional de aproximadamente 10 mil millones de dólares a recabarse mediante contribuciones compulsivas e impopulares en los impuestos relativos a ingresos, gasolina, compras de autos y otros rubros de lujo. Este fondo supuestamente garantizaría tasas de crecimiento anual del 6.8 por ciento a lo largo del final de la década. El objetivo a largo plazo, de acuerdo con la ampulosa descripción de Sarney, era un “Brasil con un nivel de

⁵ Véase Smith y Koster (1987) para una discusión de la alternativa heterodoxa para los tratamientos ortodoxos de choque y las razones por las que estos programas pueden ayudar a facilitar el trabajo de la consolidación democrática. Para descripciones detalladas de teoría y política del Plan Cruzado, véase Arida (1986), Lopes (1986) y Modiano (1986).

vida para toda la población igual al de la Europa Mediterránea" (*Jornal do Brasil*, 1986).

Algunas modificaciones más arrolladoras fueron propuestas hasta después de las elecciones de noviembre de 1986, debido al creciente desasosiego de los arquitectos del Plan Cruzado. Rotulado inmediatamente como el Cruzado II, este segundo paquete de ajustes económicos constituyó un intento desesperado de corregir las distorsiones cada vez más notorias en la estructura de precios relativos, a fin de gobernar en una economía sobrecalentada que amenazaba con descarrilarse y perder el control a causa del auge sin precedentes en la demanda del consumidor. Los instrumentos principales para forzar a una reducción en el consumo de la clase media fueron el retorno a minidevaluaciones diarias de la moneda e incrementos de precios oscilantes entre un 30 y un 100 por ciento en productos como automóviles, gasolina, combustible de alcohol, electricidad, servicio telefónico y postal, licores y cigarrillos. Además de restringir la demanda, estas medidas estaban diseñadas también para aligerar la deuda del sector público, aumentando los ingresos del gobierno en 11.5 mil millones de dólares para completar los ahorros compulsivos decretados en julio.⁶

Mientras estas medidas fueron ciertamente bienvenidas por un sector significativo de la comunidad empresarial, así como consideradas necesarias para restituir los corroídos márgenes de ganancias, el obvio resultado (aun cuando el gobierno se resistía a admitirlo) fue una dramática aceleración de la inflación para finales del año. En verdad, la inflación mensual para el primer trimestre de 1987 se remontó a cerca de la marca del 20 por ciento, al tiempo que algunos economistas y hombres de negocios estimaban que para 1987 la tasa sería del 500 por ciento o más. "La fe se tornó en miedo", conforme las ilusiones de la "inflación cero" se hicieron añicos irrevocablemente (*New York Times*, 1987a).

Tal como lo barrunta la mayor parte de los economistas, el futuro próximo sugiere que, contrariamente al optimismo oficial del gobierno, la estabilización será fugaz, con presiones inflacionarias que probablemente serán muy grandes para apaciguarlas pronto. Como se mencionó anteriormente, el resurgimiento de la inflación puede rastrearse en el hecho de que el congelamiento de precios decretado en febrero de 1986 desató una "parranda" en el gasto por parte de los consumidores que sobrecalentó la ya febril economía. En verdad, en 1986 el PIB creció 8 por ciento, lo que era virtualmente una réplica a la pujantísima expansión del 8.3 por ciento lograda en 1985.

Si se atendiera a la mayor parte de los estándares, tales tasas tan ele-

⁶ Para una crítica severísima del Cruzado II por un economista prominente estadounidense "partidario del abasto", véase Paul Craig Roberts (1986); véase Paul Singer (1986b) para una evaluación igualmente negativa por uno de los principales economistas brasileños de izquierda.

vadas de crecimiento serían sintomáticas de una “economía vibrante y saludable”. No obstante, tal crecimiento (y el modesto ingreso que lo hizo posible) se ha dado a costa de reavivar de nueva cuenta poderosas presiones inflacionarias. Si bien esta observación puede resultar obvia, no por ello está dirigida tanto a hacer una crítica de los *heterodoxos* responsables del Plan Cruzado como para subrayar las coacciones externas mencionadas previamente que tienen sujeto al Brasil como una camisa de fuerza con pocas, preciosas, opciones.

Muchos de los críticos del gobierno, y no pocos teóricos responsables del Cruzado, arguyen que el atolladero actual proviene de dos errores básicos: primero, en los inicios de la instrumentación del plan, el equipo Funaro otorgó inicialmente un aumento salarial demasiado elevado (aunque, por supuesto, los niveles de vida para la mayor parte de los trabajadores permanecieron abismalmente bajos) con lo cual creó una demanda excesiva, y, segundo, las autoridades económicas esperaron demasiado para “flexibilizar” el congelamiento de precios, factor que agobió a muchas compañías y contribuyó para que hubiera mercados negros y una penetrante escasez en el proceso de abasto (*Senhor*, 1987b; *Veja*, 1987a). Según este punto de vista, la falla del Cruzado como plan de estabilización es, por lo mismo, no tanto el resultado del congelamiento de precios *per se*, sino el hecho de que las autoridades “esperaron demasiado tiempo” antes de emprender una acción correctiva. El congelamiento de precios fue finalmente levantado a fines de enero de 1987 (si bien hay algunos dentro del gobierno que favorecen su reimposición después de una realineación de precios), aunque ello no acaeció sino hasta que hicieron erupción tanto las horrendas advertencias de un “colapso económico inminente”, como el desgaste en las relaciones entre el gobierno y la empresa: todo ello se hizo patente en el indecoroso intercambio público cuando Mário Amato, el director de la poderosa Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) emitió veladas amenazas de “desobediencia civil” y el presidente Sarney respondió con el castigo de los “especuladores” en la comunidad empresarial, a los que se refirió como “anarquistas” (*Veja*, 1987b).

La administración económica del gobierno parece haber fracasado igualmente en el frente que intentaba el ajuste externo así como en la lucha de estabilización interior. Tras la bandera nacionalista, Brasil ha rechazado la asesoría del FMI para su política económica, e incluso logró un acuerdo con el Club de París sin el sello acostumbrado de aprobación por parte del FMI. Hacia principios de 1987, sin embargo, el nivel de reservas internacionales sostenidas por el Banco Central alcanzó apenas los 4 mil millones de dólares, cifra dramáticamente inferior en más de 10 mil millones a la anunciada en la publicación del Cruzado, y el excedente comercial cayó de un promedio de más de mil millones de dólares a unos 150 o 200 millones. Al igual que el problema de la inflación, se ha echado

la culpa de la débil posición externa del Brasil al congelamiento de precios y al auge resultante en el gasto del consumidor, hecho que creó un revuelo excesivo en la demanda de importaciones y canalizó exportaciones hacia el mercado interno.

Ante la aguda caída en las reservas internacionales y los aproximadamente 9 mil millones de dólares en pagos por concepto de intereses sobre los 108 mil millones de dólares de su deuda externa a pagar en 1987, el presidente Sarney suspendió el 20 de febrero en forma unilateral los pagos sobre la deuda comercial del Brasil, consistente en 81 mil millones, a bancos privados, incluyendo alrededor de 24 mil millones de dólares a bancos de Estados Unidos, a cuya cabeza están el Citicorp, el Chase Manhattan y el Bank of America. Sarney y el ministro de Finanzas Funaro aclararon apresuradamente que esta suspensión, apodada inmediatamente por los brasileños como una "moratoria blanda", era una "medida temporal". La reacción en el extranjero fue silenciada, pues el miedo principal es que si se reclasifica la deuda del Brasil como "no operante" (el Citicorp, por ejemplo, sufriría una pérdida de 190 millones de dólares con todo e impuestos en sus préstamos de 4.6 mil millones), la solvencia de los bancos internacionales podría verse amenazada. La administración de Reagan y los bancos expresaron esperanzas de negociar una "solución duradera" mediante la cual Brasil pudiera evitar convertir la suspensión temporal en una moratoria permanente (*Wall Street Journal*, 1987; *New York Times*, 1987b).

La motivación principal en la suspensión fue un gambito de negociación combinada y la necesidad desesperada por reforzar la debilitada posición política interna del gobierno. Conforme la inflación aumentaba tras las elecciones de noviembre de 1986 y el Cruzado II, surgieron serias divisiones entre los consejeros económicos de Sarney: el presidente del Banco Central fue forzado a dimitir, y pronto lo siguió el ministro de Planeación Sayad, quien se mostró en desacuerdo con las políticas de Funaro para manejar la deuda y para combatir el resurgimiento de la inflación. Asimismo, Sarney se vio fuertemente presionado por gobernadores, congresistas y senadores del PMDB, quienes se hallaban preocupados con la pérdida del apoyo popular por parte del gobierno; algunos sectores exigieron incluso el acortamiento del mandato de Sarney (*Senhor*, 1987a).

La suspensión en los pagos de la deuda pueden ser útiles para el Presidente, al menos temporalmente, para enfrentar a los reacios del país. En cierto sentido, estos movimientos en el frente externo reflejan en gran medida, y desde un aspecto formal, la manera en que la instrumentación de la política económica ha buscado contener la inflación. El gobierno es quizá criticable por haber esperado demasiado para levantar el congelamiento de precios, pero el programa de Sarney —y del PMDB— ha sido el de sacar el máximo provecho político de la agitación que resultó de ello para el gasto del consumidor. En consecuencia, sólo hasta que estu-

vieron listos los resultados de las elecciones llegó el tiempo de aplicar aquellas medidas destinadas a levantar los controles.

Estas observaciones no pretenden menospreciar el hecho de que, a todo lo largo de la *Nova República*, la estrategia y las tomas de decisión política han estado dictadas en gran medida por “preocupaciones políticas” (después de todo, pese a su contenido técnico, todas las decisiones políticas son “inherentemente políticas”). Imaginar que la instrumentación de políticas en un medio sensible a las exigencias de la política partidaria y competencia electoral pudieran ser de otro modo, es ignorar las realidades que enfrenta un régimen democrático frágil todavía y en proceso de consolidación. (Sólo en sociedades democráticas bendecidas por una elevada legitimidad y por agencias burocráticas bien institucionizadas —o en regímenes extremadamente autoritarios— pueden los políticos permitirse no ser responsables y sensibles a las preocupaciones de orden social.)

La sensibilidad de las políticas gubernamentales ante los caprichos de su *rating* de popularidad (los políticos brasileños son lectores ávidos de encuestas de opinión pública) es de esperarse; aun así, las improvisaciones resultantes *ad hoc* dan razón al punto de vista según el cual la administración económica de Sarney se preocupa menos de la estabilización o crecimiento a largo plazo que de cuestiones más inmediatas de supervivencia política y cálculos de su ventaja electoral. Sobre estos temas, y sobre la dinámica de las elecciones y la competencia partidaria bajo la *Nova República*, es que se ocupa la sección siguiente.

Los partidos y la competencia electoral

La libertad de maniobra política de José Sarney se ha visto restringida por el frágil pacto político negociado por Tancredo Neves durante los meses finales del régimen militar. Fiel a su heterogénea composición, la coalición de *Aliança Democrática* mostró estar mucho mejor equipada para las exigencias de garantizar la transición a partir de la égida militar que para el ejercicio estable del poder estatal. La difícil convivencia del PMDB y el PFL en el gabinete de Sarney y el Congreso se ha visto agravada por la “irresponsabilidad” ocasional del PMDB, fruto de sus largos años en la oposición, sus propias divisiones internas y sus titubeos en afirmar su papel de socio dominante de la coalición.

La fragilidad de la *Aliança Democrática* quedó al descubierto en las elecciones municipales de noviembre de 1985 (IUPERJ, 1985). Tales elecciones, que se celebraran en todas las capitales estatales y en las ciudades más importantes, incluyendo 179 municipios designados previamente como “zonas de seguridad nacional”, aceleraron el desenlace de la alianza del PMDB-PFL. El PMDB siguió como el partido más grande, ganando 110 de las 201 contiendas por los municipios y logró 19 capitales estatales, al tiempo que sólo perdió en 4 (São Paulo, Río de Janeiro, Recife y Forta-

leza). El PMDB ganó 33.9 por ciento del voto popular a todo lo largo de la nación. El PDS fue el mayor perdedor y por poco desaparece en las ciudades más grandes del sur del Brasil, mientras que el PFL emergió como el partido conservador dirigente, si bien fracasó en conseguir el control en alguna de las capitales estatales. El voto combinado por el PEL, el PDS y el pequeño *Partido Trabalhista Brasileiro* (Partido Brasileño del Trabajo o PTB) fue del 28.2 por ciento, lo que indicó el declive continuo del apoyo electoral por los partidos conservadores. Una significativa polarización política e ideológica del electorado (especialmente en el sur y centro-sur) se tradujo en un modesto avance para la Izquierda. El voto popular combinado por el *Partido dos Trabalhadores* (Partido de los Trabajadores o PT), el Partido Democrático del Trabajo (*Partido Democrático Trabalhista* o PDT) y el recientemente creado *Partido Socialista Brasileiro* (Partido Socialista Brasileño o PSB) fue del 26.5 por ciento. Este cambio hacia la izquierda se dio a expensas del PMDB, que se convirtió más bien en un partido de centro, lo cual condujo a ciertas predicciones de la “domesticación” del PMDB y de su inclinación hacia la derecha.

Pese al pobre lucimiento nacional de los partidos conservadores, la derecha marcó una victoria muy significativa en la justa crucial por la alcaldía de São Paulo. El derrumbe de la *Aliança Democrática* más una fuerte opción por la izquierda permitieron al ex presidente Jânio Quadros ganar con un 37.5 por ciento de votos como el candidato del PTB apoyado por el PFL. El senador Fernando Henrique Cardoso, del PMDB, recibió el 34.3 por ciento de los votos y el 19.8 por ciento fue para el diputado Eduardo Matarazzo Suplicy, el candidato del PT. Subyace a estos resultados el hecho de que las campañas políticas en la *Nova República* se han vuelto enormemente costosas: según corre la voz, se gastaron aproximadamente 80 millones de dólares por toda la nación debido al uso extensivo de consultantes políticos, encuestas de opinión y medios masivos (*Senhor*, 1985b).

El triunfo conservador de Jânio Quadros en São Paulo fue seguido, tres meses después, por una sacudida ministerial que dio al gobierno de Sarney una complejión decididamente conservadora. El nuevo gabinete incluía doce ministros, quienes, como el mismo Sarney, se habían opuesto a las elecciones presidenciales directas en abril de 1984. Seis de los nuevos ministros habían sido gobernadores progobiernistas bajo el régimen militar. Los quince ministerios controlados por el PMDB abarcaban las finanzas y la planeación junto con la agricultura, la justicia, el trabajo y la salud, pero cinco ministerios del PFL —minas y energía, comunicaciones, educación, gabinete civil y relaciones exteriores— controlaban el 70 por ciento del presupuesto federal. De un modo paralelo, los empresarios en la industria, las finanzas, el comercio y la agricultura se lanzaron a un serio esfuerzo por organizarse para la acción política, tratando de hacer a un lado conflictos sectoriales con el fin de realzar la influencia empre-

sarial en el gobierno y llevar al máximo su acometida en la inminente contienda electoral (*Veja*, 1986a; Diniz, 1985).

El carácter conservador del nuevo gabinete produjo gran júbilo en el PFL y en algunos leales del *ancien régime*, como el ex ministro de finanzas Antonio Delfim Netto, quien elogió la “excelente” selección de los nuevos ministros por parte de Sarney. Por el contrario, reinó la desesperación en el PMDB, pues algunos líderes del partido llegaron a considerar la ruptura con Sarney y el abandono de la coalición gubernamental. El dirigente del PMDB en la cámara baja, Pimenta da Veiga, preguntó ¿cómo podría “explicar de ahora en adelante que Sarney [presidente honorífico del partido] pertenezca al PMDB?” El senador Fernando Henrique Cardoso renunció a su cargo como vocero del gobierno en el Congreso, diciendo que “actualmente gobiernan el Brasil el ala moderada del ejército y el ala liberal del gobierno anterior, más un grupo de amigos [de Sarney]; la Nueva República es la misma que la Vieja República” bajo los militares. Raymundo Faoro señaló que el gobierno se “había quitado la careta”, declarando que “no había habido ninguna transición [democrática]. La eliminación de los residuos autoritarios era sólo un eslogan” (*Senhor*, 1986a; *Veja*, 1986a).

Los acontecimientos que vinieron después demostraron, una vez más, los impulsos contradictorios del gobierno de Sarney y los lazos íntimos entre la conveniencia política y los planes de acción en la economía, cuando las fanfarrias del Plan Cruzado servían para contrapesar los recientes avances conservadores. A pesar de que las cuestiones ideológicas desempeñaron sin duda su papel, el viraje hacia la derecha de Sarney, a nivel del gabinete, y el fortalecimiento subsecuente de las fuerzas reformistas moderadas del PMDB en control del Cruzado representaron el intento pragmático del Presidente por ganar de nuevo el control de la economía, al tiempo que le concedían un espacio mayor de maniobra en los debates sobre reforma constitucional durante el período que desembocó en las elecciones de noviembre de 1986. Mediante estas complejas maniobras, Sarney buscó liberarse del liderazgo del PMDB y del ala izquierda del partido para fortalecer su propia base independiente de apoyo electoral y popular. (Muchos observadores creyeron entonces que el Presidente deseaba un realineamiento partidario, acaso mediante la formación de un partido nuevo moderado de centro-derecha o una coalición de partidos capaz de aglutinar elementos del PFL, el ala liberal anti-Maluf del PDS, los moderados del PMDB y los conservadores no afiliados.)⁷

La apuesta de Sarney rindió atractivos dividendos a corto plazo, cualesquiera fuesen sus motivaciones. En marzo y abril de 1986, muchos brasileños que lucían botones verdes y amarillos, que identificaban a sus

⁷ Fleischer (1986) ha proporcionado una discusión muy útil de la evolución del sistema partidario así como de los cambiantes alineamientos parlamentarios hasta la víspera de las elecciones de noviembre de 1986.

portadores como *Fiscais do Sarney* ("inspectores de precios de Sarney"), pidieron que los supermercados, las farmacias y los puestos de hamburguesas rebajaran sus precios a los niveles aprobados oficialmente. Una encuesta dirigida a la clase media testificó una inversión aguda en las expectativas que siguieron al anuncio del plan: en marzo, más del 80 por ciento de los consultados afirmaron que su situación económica había mejorado significativamente, aunque esta cifra cayó al 44 por ciento hacia finales de agosto. La aprobación de Sarney por parte de los hombres de negocios se fue a los cielos. De acuerdo con un sondeo, la actuación del Presidente fue considerada "excelente" por el 82 por ciento, contra un 48 por ciento en enero, antes de la develación del Plan Cruzado (*Senhor*, 1986c).

Con todo, el efecto político favorable del Cruzado comenzó a menguar hacia septiembre. Los controles de salarios se toparon con una creciente resistencia, ya que los trabajadores organizados y los industriales, algunos profesionistas de clase media, los productores agrícolas y los comerciantes también expresaron su descontento con uno u otro aspecto de los nuevos controles económicos. Continuaron brindando firmemente su apoyo al Cruzado los pobres, especialmente los que percibían menos de siete salarios mínimos.

A pesar de este incipiente descontento, la popularidad del Cruzado sofocó el resto de los problemas en la campaña de escaso sesgo ideológico que condujo a las elecciones de noviembre. Los candidatos centristas del PMDB ganaron 22 de las 23 gubernaturas, incluyendo los estados clave de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Los moderados y conservadores del PMDB registraron una victoria avasalladora, ganando una cómoda mayoría de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado, lo que les dio un firme control en el nuevo Congreso. El PFL, el compañero más reciente en la *Aliança Democrática*, no obtuvo similares ventajas del Cruzado, aunque logró arreglárselas para establecerse como el segundo partido del Brasil. Los partidos de izquierda lograron muy poco y recibieron una porción menor del voto popular que en las elecciones municipales de 1985.

Pese a ello, la victoria arrolladora del PMDB no aseguró el apoyo renovado de las masas para el gobierno de Sarney. El anuncio del paquete Cruzado II, una semana después de las elecciones, reveló la naturaleza contingente del apoyo popular del gobierno. El desencanto con las nuevas medidas produjo un estallido inesperado de protestas colectivas, incluyendo una marcha de unos 20 000 manifestantes en Brasilia que fue reprimida por tropas del ejército, las cuales emplearon tanques y gases lacrimógenos. El potencial para el descontento fue registrado más adelante por una huelga general pobremente organizada a mediados de diciembre de 1986. Con la opinión pública fuertemente opuesta al Cruzado II (84 por ciento del público en São Paulo dijo que se verían lesionados por las nuevas medi-

das), la popularidad de Sarney experimentó una caída súbita y aguda, particularmente entre la clase media: en Rio de Janeiro y São Paulo el *rating* de la aprobación al Presidente cayó del 72 por ciento, en septiembre, a sólo el 34 por ciento, en diciembre (*O Estado de São Paulo*, 1986; *Folha de São Paulo*, 1986).

La aceleración de la inflación, a principios de 1987, condujo inexorablemente al Cruzado III y a nuevos virajes en la política económica. La elevación de los precios, ciertos conflictos sobre los criterios de ajuste salarial y la suspensión de pagos en la deuda externa apuntan a un panorama de luchas distribucionales en escalada. De manera similar, las dificultades del gobierno, el trabajo organizado y los empresarios para alcanzar un acuerdo sobre un "pacto social" presagia una polarización cada vez más profunda en 1987.

El presidente Sarney, frente a una popularidad en caída libre y un ingobernable PMDB, presionó a la Asamblea Constituyente para que lo confirmara en su cargo por un período completo de seis años —hasta marzo de 1991—; esto le daría el apoyo político que necesitaba para hacer frente a la crisis económica. Los partidarios de Sarney argumentaron que, en el despertar de la decisión para suspender los pagos de la deuda, sería peligroso embarcarse en delicadas negociaciones internacionales mientras estuviera en juego la duración del mandato presidencial.

Sarney se vio desafiado por varias figuras políticas de relevancia que aspiran a sucederlo, incluyendo al populista de inclinación de izquierda Leonel Brizola, y Aureliano Chaves, el ministro de Sarney de Minas y Energía, y líder del PFL. Pero la principal lucha por el poder empezó a perfilarse entre Sarney y Ulysses Guimarães, líder veterano que, a los setenta años, apenas si podía esperarse a las elecciones de 1990. La estrategia de Sarney descansaba en dos objetivos básicos. El primero era restringir la "soberanía" de la Asamblea en lo tocante a cuestiones constitucionales básicas; en esto se halla vigorosamente secundado por conservadores y militares. El segundo era crear su propio bloque político independiente, en el Congreso y fuera de éste, para liberarse de la dependencia del PMDB (*Senhor*, 1987d). Acortar el mandato de Sarney, argüían los conservadores, sería equivalente a un "golpe constitucional". En medio de estas luchas, uno de los detentadores importantes del poder, los militares, permanecieron firmemente al lado del Presidente.

El papel de las fuerzas armadas en la nueva democracia

Hay pocas probabilidades, salvo el desastre económico o la inquietud social a gran escala, de que las fuerzas armadas recurran a la intervención política directa antes de la próxima sucesión presidencial. No obstante, el grado de la propia democratización de los militares influirá profundamente en las perspectivas para la consolidación democrática. A ese res-

pecto, hay causas para una preocupación considerable. El aparato represivo permanece intacto, la postura intervencionista latente en las fuerzas armadas no se ha modificado casi nada, y la presencia institucional de los militares en el Estado no se ha visto afectada significativamente por el gobierno de los civiles.

El *Serviço Nacional de Inteligência* (SNI), controlado por los militares, y el aparato de seguridad del ejército, la marina y la fuerza aérea siguen ilesos frente a las reformas democráticas instauradas desde marzo de 1985. De hecho, la llamada *comunidade de informações* no sólo ha continuado con su práctica tradicional de control ideológico, sino que ha adquirido nuevas funciones en la mediación de los conflictos burocráticos dentro del régimen. El SNI también está ampliamente involucrado en coordinar los contactos de Sarney con gobiernos estatales, empresarios y otros grupos influyentes. La presión intervencionista de la doctrina de seguridad nacional de los militares no ha sido modificada bajo la *Nova República*. Las fuerzas armadas se han opuesto con todo éxito a cualquier modificación significativa de la ley de Seguridad Nacional. Un sustituto propuesto por el gobierno, la Ley para la Defensa del Estado Democrático, ha sido criticado por muchos juristas por no ir lo suficientemente lejos en repeler los poderes arbitrarios del Estado; se piensa que hay pocas probabilidades de que la Asamblea Constituyente innove mucho a este respecto. Los militares se han opuesto agresivamente a la investigación de escándalos del pasado en los que se hallaban involucrados oficiales de alto rango, y han obstruido cualquier cambio constitucional que limite su papel como guardianes de la "seguridad nacional".

Los recalcitrantes han planteado sus puntos de vista con más claridad. Por ejemplo, el general Euclýdes Figueiredo, hermano del expresidente y comandante de la Escuela Superior de Guerra (ESG), antes de su retiro a fines de 1985 criticó abiertamente la legalización del partido comunista, y advirtió a los militares que "no aceptaran a los partidos comunistas porque no son democráticos. La vamos a pagar con creces. El enemigo es el enemigo". De manera similar, el ministro del ejército, general Leonidas Pires Gonçalves, al expresar el punto de vista predominante de los moderados entre los oficiales de alto rango, ha advertido perentoriamente al Congreso y a los miembros de la Asamblea Constituyente que "los deberes de las fuerzas armadas son una tradición que no necesita cambios". Estos mensajes necesitaron poca decodificación (*Senhor*, 1985a).

La militarización del Estado brasileño desde 1964 ha dado a las fuerzas armadas una presencia considerable en las agencias administrativas civiles, lo cual ha conducido al surgimiento de un verdadero complejo militar-burocrático. De acuerdo con un estudio, cerca del 30 por ciento de los 360 puestos clave de tomas de decisión en el gobierno federal durante el período de Figueiredo, fueron confiados a oficiales militares. Esta

penetración abarcaba una vasta red de tecnócratas militares, entre los que se contaban de veinte a cuarenta mil oficiales retirados que se extendieron hacia afuera, en los gobiernos estatales, al igual que en el sector privado. No hay evidencias de que este impresionante grado de militarización haya cambiado sustancialmente desde marzo de 1985 (De Góes, 1984).

El surgimiento de una próspera industria militar complementa estos mecanismos de penetración y control. Después de sólo quince años de intenso desarrollo, Brasil se hace cargo ahora de cerca del 80 por ciento de sus necesidades de material de guerra a través de la producción local; actualmente es el quinto o sexto exportador de armas con ventas anuales al extranjero de unos tres mil millones de dólares. El complejo militar-industrial brasileño comprende globalmente alrededor de 350 compañías y 200 000 empleados, y, según los reportes, se debe a él hasta el 4 o 5 por ciento del PIB. Hay un debate considerable acerca del significado de estas cifras. Algunos especialistas argumentan que la importancia estratégica del complejo militar-industrial —y la lección de la humillante derrota argentina en la guerra de las Malvinas— ha sido un instrumento para forjar una nueva conciencia en el cuerpo de oficiales acerca de la vital “misión externa” de las fuerzas armadas, lo cual puede ser por lo tanto una fuerza para la democratización. Otros analistas afirman la tesis opuesta (Kramer, 1984; De Góes, 1985; Brigagão, 1987). En todo caso, este gran cúmulo de poder bajo control sustancial de los militares dota de una tremenda influencia sobre problemas relacionados con las políticas de seguridad nacional, comercio exterior y políticas económicas internacionales, promoción industrial y proteccionismo, cuestiones laborales y demás rubros.

Un observador cercano a los militares ha concluido que “el sistema político —y dentro de éste las fuerzas armadas— no ha dado los pasos relevantes para reexaminar seriamente las premisas básicas del intervencionismo militar” (De Góes, 1985: 17). La capacidad de los militares para limitar el ritmo y grado de las transformaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad brasileña continúa básicamente sin tocar por la *Nova República*. En atención a la concatenación apropiada de la crisis económica, los trastornos sociales y la debilidad observada por las élites civiles, la intervención militar directa ciertamente no puede excluirse. Pero, en un futuro previsible, lo más probable es que las fuerzas armadas buscarán conformar la política nacional a través de discretas presiones aplicadas en combinación con sus aliados en la comunidad empresarial, aparte de las advertencias ocasionales más explícitas que hagan a los políticos civiles.

LA CONCILIACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA ÉLITE:
ALGUNAS ESPECULACIONES FINALES

Son prematuros aún los juicios acerca del resultado del proceso de transición del régimen y la consolidación democrática. Mi análisis del manejo del gobierno de Sarney del programa democrático tiene su punto de partida en la premisa de que el retorno al gobierno civil no puso un fin abrupto al proceso de apertura iniciado una década antes bajo la égida militar. Por el contrario, la acción recíproca entre las fuerzas sociales y políticas, expresada a través de la lógica del poder estatal y la de la expansión democrática, continúa bajo la *Nova República*. Es precisamente esta acción recíproca de ambas lógicas la que, en términos generales, tiene que enfrentar la *Nova República*, con el reto de consolidar una nueva institucionalidad democrática, a la vez que atendiendo a sus pavorosas responsabilidades sociales y económicas.

Como se mencionó en la introducción, el actual régimen democrático enfrenta la elección entre dos proyectos nacionales alternativos (Presser Pereira, 1985). Ambos proyectos profesan valores democráticos, y los dos son claramente compatibles con una economía de mercado. Pero hay diferencias fundamentales entre ambos. El primero, la conciliación de las élites desde arriba, sería "liberal" pero su potencial democrático, especialmente en lo que concierne a cuestiones fundamentales de orden social y económico, estaría severamente limitado por el consenso implícito entre las clases dominantes y las élites dirigentes para preservar los rasgos fundamentalmente autoritarios y exclusivistas del "capitalismo salvaje" del Brasil.⁸

El segundo proyecto, "democratización fundamental", tiene el potencial para una transformación mucho más amplia, centrándose en la extensión de la ciudadanía a las clases subalternas.⁹ Semejante proyecto, que

⁸ La conciliación de las élites desde arriba tiene una larga trayectoria en la historia brasileña que data del Imperio y la Vieja República (1889-1930). Véase Debrun (1983) para un análisis particularmente provocador de esta estrategia, su evolución y su uso durante la transición democrática. También son importantes Roberto da Matta (1979) y la comparación de O'Donnell (1984) de la sociabilidad política en Argentina y Brasil.

⁹ La noción de "democratización fundamental" fue acuñada por Karl Mannheim (1940). La expansión de la ciudadanía se halla en el centro de este proceso de profundización democrática. El tratado clásico de Marshall (1965) está sujeto a malas interpretaciones frecuentes en el sentido de que la extensión de la ciudadanía siempre sirve a una función de legitimación "integrando" estratos subordinados en la comunidad nacional después de la fase heroica de la acumulación de capital. Sin embargo, como señala Lockwood (1974: 367), "en el siglo **xx** la ciudadanía y el sistema clasista capitalista han estado en guerra", incluso en sociedades industriales avanzadas. Con la comprensión de la ciudadanía, el contraste entre la igualdad de derechos por principios que otorga y las desigualdades sin principios arrojadas por el mercado pueden quedar resaltadas, más que lo con-

por fuerza habrá de tomar varias décadas, podría facilitar la tolerancia de “incertidumbres predecibles” y acelerar la institucionalización de una “lucha de clases democrática” a través de los sistemas electorales y partidarios. La exitosa modernización de la economía política, que podría conducir al capitalismo brasileño al siglo veinte, sería ciertamente un gran logro, pero difícilmente sería único en términos históricos. Por el contrario, aunque hubiera una variación considerable en lo que toca a aspectos específicos, este resultado sería similar a la situación en sociedades capitalistas avanzadas, en las que el surgimiento de la democracia política ha sido menos el producto de un consenso básico de valores fundamentales que una solución “mejor, pero de segunda categoría” a los múltiples conflictos inherentes a las economías de mercado contemporáneas (Przeworski, 1985; Offe, 1984).

Las fuerzas sociales principales en el horizonte de la *conciliação pelo alto* reúnen, a un nivel estructural, al ala más tradicionalista del gran capital productivo y financiero, y a los terratenientes rurales. Los sectores conservadores de la clase media urbana y los sectores tecnoburocráticos, que están ligados a los proyectos “faraónicos” de desarrollo iniciados bajo el régimen militar, estarían también fuertemente atraídos a semejante proyecto. Las poblaciones rurales en los *grotões* (“pueblos rústicos” o “de resaca”) podrían probablemente ser movilizadas electoralmente como una clase de apoyo a través de medios clientelistas.

La alianza de clases y sectores se reunirían en torno a políticas económicas monetaristas ortodoxas y al alineamiento cercano con la política exterior de Estados Unidos y la comunidad financiera internacional. Estos grupos hegemónicos de alianza favorecerían también una acometida antiestatal hacia la privatización de las empresas públicas. Por el contrario, una alianza semejante opondría en general esquemas de redistribución de ingresos, modernización en la legislación laboral existente, una reforma agraria extensa y cambios constitucionales conducentes a ampliar la participación popular. A nivel político, este “pacto burgués liberal” encontraría a sus principales exponentes en el PFL, el PDS, el PTB y el ala conservadora antirreformista del PMDB.

El segundo proyecto, más “progresista” y orientado hacia el cambio, abarca un conjunto más contradictorio de clases y sectores. En términos estructurales, esta alianza podría incluir a aquellos empresarios, grandes y pequeños, que pudieran beneficiarse de una expansión del mercado interno, de la sofocación de la especulación financiera y nuevas oportunidades de exportación. Asimismo, atraería a los sectores más liberales de la clase media urbana y los empleados públicos, especialmente a aquellos

trario (Goldthrope, 1978: 202). Dada la expansión contra la corriente de las relaciones de mercado en el Brasil, puede esperarse que caigan bajo una creciente presión las formas tradicionales “salvajes” de control y exclusión —que han apuntalado la conciliación de las élites. Véase Werneck Vianna, sus comentarios sobre los desafíos que plantea esta situación para las clases dominantes del Brasil.

identificados con los grupos tecnoburocráticos nuevos encargados ahora de la política económica. Por lo demás, los trabajadores urbanos favorecidos por la elevación de los salarios reales y la expansión del empleo, así como los trabajadores urbanos y campesinos, cuyas esperanzas dependen de la reforma agraria, podrían encontrar mucho apoyo en este proyecto.

Esta heterogénea alianza tendería a apoyar aquellas políticas económicas del tipo contenido en el Plan Cruzado, aunque podría esperarse que los sectores más reformistas presionaran por una redistribución más rápida del ingreso, una legislación más ambiciosa de reforma laboral, una reforma agraria más extensa y una expansión más amplia de los derechos ciudadanos para las clases subordinadas. A nivel político, las alas reformistas del PMDB constituirían la base principal en el Congreso y en el electorado de este "pacto popular democrático". Si bien los partidos a la izquierda del PMDB —el PDT, el PSB, los diversos partidos comunistas y especialmente el PT— tienen proyectos democráticos más ambiciosos, podrían proporcionar votos cruciales en problemas específicos dentro de una coalición parlamentaria indefinida, con los reformistas del PMDB. Los partidos de izquierda, por razones de supervivencia política, identidad ideológica y ambiciones personales se mostrarán probablemente reticentes a aglutinarse en alianzas electorales permanentes.

El resultado de la aún pendiente revisión constitucional, el posible realineamiento del sistema partidario, y ciertas decisiones concernientes a la duración del mandato de Sarney y la elección de su sucesor, serán cruciales para decidir si Brasil se embarcará en reformas democráticas más profundas o si la actual transición estará limitada a un juego de conciliación de élites con sólo una menguada conciliación desde arriba. Las fuerzas progresistas son probablemente más débiles de lo que aparentan ser. La máquina del partido PMDB —el *sine qua non* de cualquier opción política más progresista— se halla dominada en líneas generales por moderados y conservadores (Kinzo, 1986). Los esfuerzos de Sarney, a principios de 1987, para construir un bloque conservador suprapartidario confirma este panorama general.

Las futuras elecciones no parecen tener posibilidades de alterar la impronta profundamente conservadora —aun cuando se trate de un conservadurismo sin partidos conservadores ideológicamente militantes— del sistema partidario actual en el Brasil. Las contiendas locales, como fue el caso de las elecciones municipales de 1985, tienden a resaltar en exceso al Brasil urbano moderno. Por el contrario, las elecciones efectuadas a lo largo de los estados y la nación, que son factores decisivos para conformar la política nacional, tienden a destacar a las regiones y fuerzas sociales más resistentes a los cambios sociales fundamentales, restando alas así al ímpetu por una democratización más expedita (Soares, 1984; Lamounier y Menegell, 1986). Esta relación fue confirmada en los resultados de las elecciones de noviembre de 1986 y la misma lógica será vi-

gente sin duda en las futuras elecciones presidenciales para seleccionar al sucesor de Sarney.

En resumen, creo que el panorama más probable para al menos varios de los próximos años será bastante conservador. Si las fuerzas que favorecen el gobierno democrático y la *conciliação pelo alto* son capaces de fortalecer más aún su hegemonía social y política, el esfuerzo por consolidar un régimen político liberal puede tener éxito. La preocupación es si la consolidación de la democracia liberal con fuertes tendencias elitistas y exclusivistas pueda sobrevenir a un costo muy alto, a saber: posponiendo la redistribución básica del poder, así como las transformaciones fundamentales necesarias para institucionalizar una política más participativa y garantizar un orden social más justo y equitativo.

No obstante, mientras que la alineación actual de las fuerzas sociales y políticas sugiere claramente la poca probabilidad de la ascensión de una coalición de corte reformista, si hay alguna "lección" a aprender del proceso de transición y el establecimiento del régimen civil es la necesidad de esquivar conclusiones deterministas en torno a las potencialidades para el cambio en la sociedad brasileña. Esto se refleja en el hecho de que, hace quince años, antes de que la administración de Geisel se embarcara en el proceso de *distensão* y *abertura*, la probabilidad de una liberalización potencial y una transición al régimen democrático se veía en verdad remota.¹⁰

En vista de esta experiencia, es posible suponer que los militares, las clases dominantes y las élites políticas conservadoras lleguen a abrazar, aunque reticentemente, la sabiduría de acomodarse a las exigencias de un sistema más legítimo y que se oriente por una política de masas.

Para algunos analistas de convicciones más dogmáticas, tal conclusión puede parecer un ejercicio de candidez y "racionalización de la esperanza". Con todo, tal como lo atestiguan los acontecimientos de la década pasada, no tenemos por qué creer en un "despertar iluminado" por parte de los sectores privilegiados para darse cuenta de que, como resultado de ciertas transformaciones sociales y políticas complejas e insuficientemente entendidas, las élites dominantes pueden perder sus opciones si no aceptan cambios estructurales profundos.

De este modo, la única conclusión que puede alcanzarse con cierto grado de confianza es que existe una gama de posibilidades para la sociedad brasileña en el futuro. Mientras que la conciliación de las élites desde arriba es lo más probable en el futuro inmediato, no se trata aquí de una conclusión definitiva, en la medida que la dirección de la transición democrática todavía se halla inmersa en una acalorada disputa. El

¹⁰ Las recientes críticas de O'Donnell y Schmitter (1986) —y el intento de ir más allá— de la embestida determinista del pensamiento "normal" en ciencias sociales sobre la democratización constituye una lectura valiosa para ilustrar este punto.

asunto de la democracia y la urgencia de reformas sociales profundas continuarán estando a la cabeza de la agenda política. Procedente de dos décadas de autoritarismo militar, la preeminencia de la cuestión democrática y la existencia de rutas alternativas de consolidación y profundización democráticas es un logro que debemos acoger con beneplácito.

Traducido por Marta Donís.

BIBLIOGRAFÍA

- Abramoway, Ricardo: (1986), "O Velho Poder dos Barões da Terra", en Betty Feitag *et al.*, *Nova República: Um Balanço*, Porto Alegre, L & PM Editores, pp. 204-226.
- Abranches, Sergio: (1985), *Os Despossuídos: Crescimento e Pobreza no País do Milagre*, Río de Janeiro, Editora Paz e Terra.
- Arida, Pérsio (ed.): (1986), *Inflação Zero: Brasil, Argentina e Israel*, Río de Janeiro, Editora Paz e Terra.
- Brigagão, Clóvis: (1987), "The Brazilian Arms Industry", en *Journal of International Affairs*, vol. 40, núm. 1.
- Britto, Antônio (junto con Luis Claudio Cunha): (1985), *Assim Morreu Tancredo*, Porto Alegre, L & PM Editores.
- Carneiro, Ricardo: (1986), "Os Marcos Gerais da Política Econômica", en Ricardo Carneiro (ed.), *Política Econômica da Nova República*, Río de Janeiro, Editora Paz e Terra, pp. 7-27.
- Castro Andrade, Regis de: (1981), "Brasil: A Economia do Capitalismo Selvagem", en *Revista de Cultura e Política*, núm. 4, São Paulo, febrero-abril, pp. 7-30.
- Cavarozzi, Marcelo, Liliana de Riz y Jorge Feldman: (1986), "Concertación, estado y sindicatos en la Argentina contemporánea", Buenos Aires, manuscrito.
- Chagas, Carlos: (1985), *A Guerra das Estrelas (1964-1984): Os Bastidores das Sucessões Presidenciais*, Porto Alegre, L & PM Editores.
- Dallari, Dalmo: (1986), "Como nos Velhos Tempos", en Barbara Freitag *et al.*, *Nova República: Um Balanço*, Porto Alegre, L & PM Editores, pp. 155-167.
- Da Matta, Roberto: (1979), *Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro*, Río de Janeiro, Editora Zahar.
- Da Silva, José Graziano: (1985), *Para Entender O Plano Nacional de Reforma Agrária*, São Paulo, Editora Brasiliense.
- Debrun, Michel: (1983), *A Conciliação e Outras Estratégias*, São Paulo, Editora Brasiliense.
- De Góes, Walter: (1983), "O Novo Regime Militar no Brasil", en *Dados*, vol. 27, núm. 3, Río de Janeiro, pp. 361-378.

- De Góes, Walter: (1985), "Os Militares e a Transição Política", ponencia presentada en la X Reunión anual del ANTOCS, Agua de São Pedro, Brasil.
- Dimenstein, Gilberto *et al.*: (1985), *O Complot que Elegeram Tancredo*, Río de Janeiro, Editora JB.
- Diniz, Eli: (1985), "A Transição Política no Brasil: Uma Reavaliação da Dinâmica da Abertura", en *Dados*, vol. 28, núm. 3, Río de Janeiro, pp. 329-346.
- Diniz, Eli: (1985), "O Empresariado e o Momento Político: Entre a Nostálgia e o Temor do Futuro", *Cadernos de Conjuntura*, núm. 1, Río de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, octubre.
- Fernandes, Florestan: (1985), *Nova República?*, Río de Janeiro, Editora Zahar.
- Fleischer, David: (1986), "The Evolution of Political Parties in the Brazilian Congress". Ponencia presentada en el XXI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Boston, del 23 al 25 de octubre.
- Folha de São Paulo*: (1986), 23 de diciembre: 43A.
- Goldthorpe, John H.: (1978), "The Current Inflation: Towards a Sociological Account", en Fred Hirsch y John H. Goldthorpe (eds.), *The Political Economy of Inflation*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, p. 202.
- IBASE: (1986a), *Políticas Governamentais*, Río de Janeiro, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, julio.
- IBASE: (1986b), *Políticas Governamentais*, Río de Janeiro, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, octubre.
- IUPERJ: (1985), "As Eleições Municipais de 85 e a Conjuntura Política", *Cadernos de Conjuntura*, núm. 3, Río de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, noviembre.
- Jaguaribe, Hélio *et al.*: (1986), *Brasil, 2000: Para um Novo Pacto Social*, Río de Janeiro, Editora Paz e Terra.
- Jornal do Brasil*: (1986), 29 de julio, núm. 1, p. 5.
- Kramer, Paulo: (1984), "Complexo Industrial Militar e Exportação de Armamento no Brasil", *Perspectivas Internacionais*, Río de Janeiro, núm. 4.
- Kinzo, Maria D'Alva Gil: (1986), "The PMDB in the Political Transition in Brazil", ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Boston, del 13 al 25 de octubre.
- Lamounier, Bolivar, Alkimar R. Moura: (1986), "Economic Policy and Political Opening in Brazil", en Jonathan Hartlyn y Samuel A. Morely (editores), *Latin American Political Economy: Financial Crisis and Political Change*, Boulder, Westview Press, pp. 165-196.

- Lamounier, Bolívar, Rachel Meneguell: (1986), *Partidos Políticos e Consolidação Democrática: O Caso Brasileiro*, São Paulo, Editora Brasiliense.
- Latin American Regional Reports: Brazil*: (1985a), 18 de octubre, pp. 4-5.
- Latin American Regional Reports: Brazil*: (1986), 14 de agosto, p. 8.
- Lessa, Renato: (1986), *Dilemas da Institucionalização Brasileira: Os Primeiros Passos Rumo à Constituinte*, serie Estudos núm. 46, Río de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Río de Janeiro, abril.
- Lockwood, David: (1984), "For T. H. Marshall", en *Sociology*, núm. 8, Londres, p. 367.
- Lopes, Francisco: (1986), *O Choque Heterodoxo: Combate a Inflação e Reforma Monetária*, Río de Janeiro, Editora Campus.
- Mannheim, Karl: (1940), *Man and Society in an Age of Reconstruction*, Nueva York, Harcourt, Brace and World, reimpressão de bolsillo sin fecha.
- Mainwaring, Scott (por aparecer), "Grass Roots Popular Movements, Identity, and Democratization in Brazil", en *Comparative Political Studies*.
- Mainwaring, Scott: (1986), "The Transition to Democracy in Brazil", en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 28, núm. 2, primavera, pp. 149-179.
- Mainwaring, Scott y Eduardo Viola: (1984), "New Social Movements, Political Culture, and Democracy: Brazil and Argentina in the 1980s", en *Telos*, núm. 61, junio, pp. 17-52. [Hay ed. en esp. en la *Revista Mexicana de Sociología*, año XLVII, núm. 4, septiembre-diciembre de 1985.]
- Marshall, T. H.: (1965), *Class, Citizenship and Social Development*, Garden City, Doubleday-Anchor.
- Miami Herald*: (1986), 12 de junio, p. 17A.
- Modiano, Eduardo: (1986), *Da Inflação a o Cruzado: A Política Econômica no Primeiro Ano da Nova República*, Río de Janeiro, Editora Campus.
- Morais, Reginaldo "Regis": (1986), "Cardápio Trabalhista da Nova República", en Barbara Feitag et al., *Nova República: Um Balanço*, Porto Alegre, L & PM Editores, pp. 227-254.
- New York Times*: (1987a), Alan Riding, "Brazilian Economy: Faith Turns to Fear", 9 de febrero, núm. 27, p. 30.
- New York Times*: (1978b), Eric N. Berg, "Citicorp May Act on Brazil Debt", 14 de marzo, núm. 17, p. 25.
- O'Donnell, Guillermo: (1984), "¿Y a mí, qué me importa?: Notas sobre la sociabilidad política en Argentina y Brasil", en *Estudios CEDES*, Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, noviembre.
- O'Donnell, Guillermo y Phillipe Schmitter: (1986), *Transitions from*

- Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Transitions*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Offe, Claus: (1984), "Competitive Party Democracy and the Keynesian Welfare State", en Jonh Kean (ed.), *Contradictions of the Welfare State*, Cambridge, The MIT Press, pp. 179-206.
- O Estado de São Paulo: (1986), "Governo Vence Batalha de Brasília", 28 de noviembre, p. 1 ss.
- Presser Pereira, Luiz Carlos: (1985), *Pactos Políticos: Do Populismo à Redemocratização*, São Paulo, Editora Brasiliense.
- Przeworski, Adam: (1985), *Capitalism and Social Democracy*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Sader, Emir (ed.): (1985), *Constituinte e Democracia no Brasil Hoje*, São Paulo, Editora Brasiliense.
- Sampaio Júnior, Plínio de Arruda y Rui Affonso: (1986), "A Transição Inconclusa", en Barbara Freitag *et al.*, *Nova República: Um Balanço*, Porto Alegre, L & PM Editores, pp. 55-58.
- Senhor: (1985a), "Nuvens Verdes-Olivo", São Paulo, 16 de octubre, pp. 68-69.
- Senhor: (1985b), "A Fortuna Vai às Urnas", São Paulo, 18 de diciembre, pp. 94-97.
- Senhor: (1985c), "O Estado Novo do PMDB", São Paulo, 31 de diciembre, p. 12.
- Senhor: (1986a), Entrevista con Fernando Henrique Cardoso, São Paulo, 3 de marzo, pp. 5-11.
- Senhor: (1986b), "A Extrema Coragem", São Paulo, 3 de marzo, pp. 28-30.
- Senhor: (1986c), "As Portas do Paraíso", São Paulo, 29 de abril, pp. 36-38.
- Senhor: (1986d), "A Reforma Agrária Perde a Graça", São Paulo, 3 de junio, pp. 22-25.
- Senhor: (1986e), "Acabou o Estoque de Milagres", São Paulo, 18 de septiembre, pp. 48-52.
- Senhor: (1987a), "O PMDB Impõe Suas Condições", São Paulo, 20 de enero, pp. 22-28.
- Senhor: (1987b), "De Volta aos Livros", São Paulo, 27 de enero, pp. 36-37.
- Senhor: (1987c), "Frágil Prisão Legal", São Paulo, 3 de febrero, pp. 26-29.
- Senhor: (1987d), "Nem Soberania, nem PMDB", São Paulo, 17 de febrero, pp. 27-30.
- Share, Donald, Scott Mainwaring: (1986), "Transitions Through Transaction: Democratization in Brazil and Spain", en Wayne A. Selcher (editor), *Political Liberalization in Brazil: Dynamics, Dilemmas, and Future Prospects*, Boulder, Westview Press, pp. 175-216.

- Singer, Paul: (1986a), "Os Impases Econômicos da Nova República", en Barbara Freitag, *et al.*, *Nova República: Um Balanço*, Porto Alegre, L & PM Editores, pp. 89-106.
- Singer, Paul: (1986b), "O Plano Cruzado e Suas Três Inflações", en *Folha de São Paulo*, 6 de septiembre, p. 22.
- Smith, William C.: (1987), "The Political Transition in Brazil: From Authoritarian Liberalization and Elite Conciliation to Democratization", en Enrique Baloyra (editor), *Comparing New Democracies: Dilemmas of Transition and Consolidation in Mediterranean Europe and the Southern Cone*, Boulder, Westview Press.
- Smith, William C. y Evan Koster: (1987), "The Political Economy of Democratic Transition in Argentina and Brazil", ponencia presentada en la reunión anual de la International Studies Association, Washington, D.C., del 15 al 18 de abril.
- Soares, Glaucio Ary Dillon: (1984), *Colégio Eleitoral, Convenções Partidárias e Eleições Diretas*, Petrópolis, Editora Vozes.
- Sorj, Bernardo: (1980), *Estado e Classes Sociais na Agricultura Brasileira*, Río de Janeiro, Editora Zahar.
- Tavares Almeida, Maria Hermínia: (1983), "O Sindicalismo Brasileiro entre a Conservação e a Mudança", en Bernardo Sorj y Maria Hermínia Tavares de Almeida (editores), *Sociedade e Política no Brasil Pos-1964*, São Paulo, Editora Brasiliense, pp. 191-214.
- Veja*: (1986a), "Estocada no PMDB", Río de Janeiro, 19 de febrero, p. 26.
- Veja*: (1986b), "A Guerra no Campo", Río de Janeiro, 28 de mayo, pp. 20-23.
- Veja*: (1987a), Entrevista con Mario Henrique Simonson, Río de Janeiro, 7 de enero, pp. 3-6.
- Veja*: (1987b), "Confronto em Aberto", Río de Janeiro, 21 de enero, pp. 84-86.
- Viola, Eduardo y Scott Mainwaring: (1985), "Transitions to Democracy: Brazil and Argentina in the 1980s", en *Journal of International Affairs*, vol. 38, núm. 2, pp. 193-219 [hay trad. al esp., en la *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, octubre-diciembre de 1985].
- Wall Street Journal*: (1987), Peter Truell, "Bankers Say They'll Ask Brazil to Agree to IMF Pact as Condition for Debt Help", 24 de febrero, p. 17.
- Werneck Vianna, Luiz: (1983), "O Problema da Cidadania na Hora da Transição Democrática", en *Dados*, vol. 26, núm. 3, Río de Janeiro, pp. 243-264.